

COMUNICACIONES EN
TORNO A LA
CONFERENCIA DE CLAUSURA

FACULTAD DE ABSOLVER, EXCOMUNION Y RECONCILIACION CON LA IGLESIA EN EL NUEVO CODIGO

JOSE MARIA GONZALEZ DEL VALLE

Mi libro *El sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su regulación actual*¹ dio lugar a una recensión del a la sazón Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Saint Paul, en Ottawa, prof. Francis G. Morrissey, en la que, tras dar una breve noticia del contenido de la publicación, concluye que de ese contenido él aprecia particularmente mis consideraciones acerca de la jurisdicción —necesaria además del orden— para administrar el sacramento de la penitencia². En cambio, otra recensión, debida al profesor emérito de Teología Dogmática de la Universidad de Munich, prof. Michael Schmaus, se caracteriza precisamente por todo lo contrario: considera particularmente desafortunadas las consideraciones que hago acerca de ese mismo tema³, que a su entender recuerdan y no son muy lejanas a las del Sínodo de Pistoya⁴.

En realidad, a nuestro entender, el nuevo Código de Derecho canónico ha venido a confirmar que las consideraciones que en su día hice acerca de la jurisdicción —necesaria además del orden— para administrar válidamente el sacramento de la penitencia eran acertadas. En efecto, el antiguo Código de 1917 partía en el c. 862 del principio de que «para absolver válidamente de los pecados se requiere en el ministro, además de la potestad de orden, potestad de jurisdicción ordinaria o delegada sobre el penitente». Sucedió, sin embargo, que a lo largo de los siguientes cánones tal principio resultaba vaciado de contenido.

1. Pamplona, 1972.

2. En «*Studia Canonica*» 7 (1973), p. 139.

3. En «*Archiv für katholisches Kirchenrecht*» 147 (1976), pp. 307-320.

4. *Ibid.*, p. 314.

En efecto, el c. 873 señalaba quiénes tienen jurisdicción ordinaria: el Papa, los cardenales, el ordinario y el párroco en su territorio, los penitenciarios y los superiores religiosos exentos. Ahora bien, por lo que a la jurisdicción ordinaria se refiere, quienes realmente administran en la práctica el sacramento de la penitencia son solamente el párroco y el penitenciario. El Papa, los cardenales, los ordinarios locales y los superiores religiosos exentos sólo lo hacen excepcionalmente. No es sobre ellos sobre quienes recae en la práctica la tarea de confesar a los fieles. Pues bien, el c. 401 prohibía al penitenciario delegar su jurisdicción y una Instrucción de 16-X-1919⁵ que apresuró a aclarar que tampoco los párrocos pueden delegar la jurisdicción ordinaria que poseen para oír confesiones, a no ser que el obispo les hubiese dado facultades especiales para hacerlo. Como es sabido, a tenor del antiguo c. 199, quien tiene potestad ordinaria de jurisdicción puede delegarla. En consecuencia, ese principio relativo a la potestad ordinaria de jurisdicción no era aplicable a la jurisdicción para oír confesiones, por lo que a la jurisdicción para oír confesiones era necesario aplicarle un principio distinto del que rige el resto de la jurisdicción, en cuanto a su adquisición.

Lo propio acontecía con los cc. 883 y 881. El c. 883 decía que «todos los sacerdotes que viajan por mar, si han sido debidamente facultados para oír confesiones o por su Ordinario propio o por el Ordinario del puerto en que embarcan o por el de cualquier otro puerto por donde pasan en la travesía, pueden durante todo el viaje oír en la nave las confesiones de todos los fieles que navegan con ellos, aunque la nave en el viaje pase o se detenga por algún tiempo en varios lugares sometidos a la jurisdicción de diversos Ordinarios». Se seguía de tal regulación que el Ordinario otorga facultad de oír confesiones a aquellos que no son súbditos suyos ni siquiera a título de peregrinos.

El c. 872 establecía, según vimos, que para absolver válidamente, además de la potestad de orden se requiere en el ministro potestad de jurisdicción ordinaria o delegada sobre el penitente. Es decir, el c. 872 señalaba que la posesión de jurisdicción es una *conditio sine qua non* para absolver válidamente. La posesión de jurisdicción, pues, quedaba configurada como un *prius* respecto a la validez. Pero ninguna disposición existía en el Código en virtud de la cual se considera que los Ordinarios locales de tierra

5. AAS 11 (1919), p. 477.

adentro poseyesen jurisdicción sobre quienes viajan por mar; de otro lado, como quiera que el c. 883 decía que el sacerdote que había sido facultad por su Ordinario local de tierra adentro para oír confesiones podía administrar válidamente el sacramento de la penitencia a quienes viajasen con él, no había más remedio que admitir que cumplía el requisito de poseer jurisdicción sobre el penitente que el c. 872 establecía con carácter general. Y así de que la confesión era válida se deducía que poseía jurisdicción. Lo propio acontecía con el c. 881 respecto a los peregrinos. En consecuencia, la posesión de jurisdicción se convertía en un *posterius*: en vez de deducirse de la posesión de jurisdicción que la administración del sacramento era válida, había que deducir de que la administración del sacramento era válida, que quien lo administraba poseía jurisdicción.

Inversamente, aunque el c. 873 decía que los superiores religiosos exentos tienen jurisdicción ordinaria para confesar a sus súbditos, el c. 518 les prohibía confesar a sus súbditos de una manera habitual. Cabía, pues, preguntarse, ¿qué clase de jurisdicción ordinaria es aquella que no puede ejercitarse sobre quienes se otorga nada más que excepcionalmente? En efecto, en todo el capítulo dos, del título diez de la segunda parte del libro segundo (cc. 518-530) el legislador mostró gran recelo porque los superiores confiesen a sus súbditos. También los cc. 399 § 3, 367 § 3 y 891 establecían incompatibilidades entre los oficios con cura de almas —de los cuales es propio administrar el sacramento de la confesión— y los oficios con jurisdicción en el fuero externo, conforme a un principio muchas veces manifestado por la Santa Sede⁶.

Este principio de incompatibilidad entre la posesión de jurisdicción en el fuero externo y la función de administrar el sacramento de la penitencia tiene otras muchas manifestaciones. A esa razón obedecía el oficio de canónigo penitenciario, que permitía que no fuese el obispo quien administrase el sacramento de la penitencia en los casos a él reservados, tal como preveía el c. 988 § 2. El antiguo c. 891 prohibía en los seminarios al superior confesar salvo excepciones a los alumnos. Y, en fin, tanto el antiguo c. 905 como una instrucción de carácter reservado de la

6. Cfr. S. C. de Obispos y Regulares, 13-V-1611, Fontes, IV, n. 1649, p. 718; 17-XI-1640, Fontes, IV, n. 1762; 5-II-1705, Fontes, V, n. 1823, p. 800; S. C. Concilio 3-II-1685, Fontes, V, n. 2884, p. 397.

S. C. de Sacramentos de 8-XII-1939⁷ sancionaba el derecho que todo fiel tiene, especialmente quienes viven en una comunidad —seminarios, conventos, colegios, etc.— a confesarse con el confesor que sea de su agrado y dicta disposiciones precisas para impedir cualquier medida de control de los superiores sobre la libertad de confesarse.

De todo ello resulta que, a tenor de una disciplina que se remonta a la Baja Edad Media, no se considera deseable que el superior en el fuero externo confiese a sus súbditos. En consecuencia ese principio que establecía el c. 872 —de que además de la potestad de orden es necesaria la potestad de jurisdicción ordinaria o delegada sobre el penitente— debía ser rectamente entendido, porque no había que entender potestad de jurisdicción en el fuero externo, la cual era más bien un obstáculo. De ahí que propusiera abandonar el término jurisdicción para designar lo que junto al orden permite la administración válida del sacramento. Tal es lo que hace el nuevo Código de 1983.

A diferencia del antiguo c. 972 —que hablaba de potestad de jurisdicción además de la de orden—, el nuevo c. 966 dice: «Para la válida absolución de los pecados se requiere que el ministro, además de la potestad de orden, goce de la facultad de ejercerla en relación con los fieles a quienes imparte la absolución». Así, pues, el nuevo canon —si no interpretado mal— acoge plenamente la tesis por nosotros propuesta de que no son dos potestades —la de orden y la de jurisdicción— las que concurren para la validez de la administración del sacramento de la penitencia, sino una única potestad —la de orden—, respecto a la cual la Iglesia regula —unas veces *ad liceitatem* y otras *ad validitatem*— la facultad de ejercitarla.

El resto de los cánones que regulan esta cuestión se abstienen de denominar *jurisdicción* a lo que junto con el orden se necesita para administrar válidamente el sacramento de la penitencia, hablando en su lugar de *facultad* para oír confesiones. Tal facultad aparece distinguida de la potestad de régimen de que tratan los cc. 126 y ss. hasta el punto de que en el c. 144 § 2 se establece que en caso de error común y en el de duda positiva y probable la

7. Dado su carácter reservado este documento no ha sido publicado oficialmente. Puede verse una traducción al inglés en T. LINCOLN BOUSCAREN, *The Canon Law Digest*, vol. 2, Milwaukee, 1956, pp. 208-215.

Iglesia suple la necesaria facultad de oír confesiones, sin que se haya considerado suficiente ese mismo criterio tal como lo establece el c. 144 § 1, pues en él se hace referencia a la suplencia de la potestad de régimen ejecutiva. En el antiguo Código, en cambio, el c. 209 era directamente aplicable a la facultad de oír confesiones, que quedaba englobada dentro del concepto de jurisdicción.

A la vista de esta nueva regulación, resulta muy difícil sostener con Mörsdorf⁸ que la administración del sacramento de la penitencia es un acto de soberanía de la Iglesia (*Hoheitsakt der Kirche* en expresión de Mörsdorf, *hoheitliches Hun der Wirche* en expresión de Schmaus⁹). Y, desde luego, resulta fuera de lugar la pretensión de Eugen Heinrich Fischer¹⁰ de fundamentar en definiciones dogmáticas semejante aserto.

Como destaqué muy en primer plano en mi monografía, ese modo de entender la administración del sacramento de la penitencia proviene de la praxis anterior al siglo XII¹¹ en la que se percibe una ausencia de distinción clara entre delito y pecado. Según Dante¹², tal como lo interpreta Francesco Brandileone¹³, Graciano mereció el cielo por haber contribuido decisivamente a separar el fuero del delito del fuero del pecado. Quienes como Bernhard Poschmann¹⁴ o el propio Schmaus¹⁵ apelan a la praxis

8. *Der hoheitliche Charakter der sakramentalen Lossprechung*, en «Trierer Theologische Zeitschrift» (1948), pp. 335-348, donde sostiene que la abolición es un acto de soberanía pero no judicial. Vid. también, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund de Codex Iuris Canonici*, 11.ª ed. Munich, 1964, vol. 1, pp. 306-316. No obstante, señala que la absolución de los pecados es por su naturaleza un acto de la potestad de orden en, *Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht*, Friburgo Brisgovia, 1941, p. 7. En otro pasaje señala que dada la concurrencia de potestad de orden y de jurisdicción necesaria para la absolución sacramental, ésta lleva consigo el ejercicio de una potestad *vere episcopalis*, *Der Rechtscharakter dar iurisdiction fori interni*, en «Münchener Theologische Zeitschrift» 8 (1975), p. 173.

9. *Katholische Dogmatik*, vol. 4, fac. 1, 5.ª ed., Munich 1957, n. 265, p. 529.

10. *Die innere Struktur des Buss-sakramentes*, en «Münchener Theologische Zeitschrift» 1 (1950), p. 16.

11. *El sacramento...*, cit., en nota 1, pp. 48-59.

12. «Quell'altro fiammeggiar esce del riso / Di Grazian che l'uno e l'altro foro / Aiutò sì che piace in Paradiso» (Par. X, 103-105).

13. *Perchè Dante collaca in paradiso il fondatore della cienza del Diritto Canonico*, en «Rendiconti della Classe di Scienze morali storiche e filosofiche della RAN dei Lincei» (1926), seie VI, v. II, p. 102.

14. *Paenitentia secunda*, Bonn, 1940, *Die abendländische Kirchenbusse im frühem Mittelalter*, Bonn, 1930, *Der Ablass im Licht der Bussgeschichte*, Bonn, 1949, *Penitence et unction des malades*, París 1966.

15. *Katholische...*, cit., en nota 9, l. c.

de la primitiva Iglesia para sostener su tesis, no perciben ese cambio de disciplina que se produce en el siglo XII y que en el nuevo Código se encuentra todavía más perfectamente expresado.

Hay otro tema en el que la reforma de la disciplina en relación con el sacramento de la penitencia respecto al cual también parece que las ideas por mí propuestas han sido también acogidas. Me refiero a las relaciones que median entre excomunión y administración del sacramento de la penitencia.

Martín Azpilcueta hizo notar cuán pocos fueron los santos padres en la imposición de excomuniones y en qué gran medida se multiplicaron posteriormente. Hasta 1398, es decir, hasta la promulgación del *Liber Sextus*, apenas se enumeraban treinta y seis casos, que podían reducirse a veintisiete utilizando otra manera de contar. El *Liber Sextus* introdujo treinta y dos; las Clementinas, cincuenta. Después, por la bula *Coena*, las extravagantes editadas y las no editadas, las constituciones sinodales y provinciales, las visitaciones, las reservas de los seculares y de los religiosos, etc., llegaron a ser innumerables los casos reservados¹⁶.

Ante este aluvión de excomuniones, la dificultad de saber cuándo era posible administrar el sacramento de la penitencia se complicó extraordinariamente. Respecto a la validez de la absolución sacramental impartida al excomulgado, sin que previamente se le absolviese de la censura, las opiniones eran variadas. Los principales elementos ponderados eran si la transgresión del precepto que daba origen a la excomunión era pecado grave o leve y la ignorancia del penitente de haber incurrido en excomunión. Ante la dificultad de comprobar estas cuestiones, los autores dieron en decir que si el penitente era poco conocido del confesor, o había confesado muchos pecados mortales, debería el confesor absolverle *ad cautelam* de las censuras, mediante la fórmula «absolvo te ab omni vinculo excommunicationis et interdicti» o bien «absolvo te a censuris in quantum possum et tu indiges»¹⁷; fórmula esta última que todavía se utilizaba cuando escribí mi monografía. Escribía entonces: «Esta previa absolución de censuras de carácter hipotético —si yo puedo y tú lo necesita— se continúa utilizando en nuestros días. Mas no resulta una solución satisfactoria,

16. *Manuale confesarium*, Madrid 1574, p. 434.

17. Vid. estado de la cuestión en Juan CLERICATO, *Decisiones sacramentales*, lib. IV, *De poenitentia*, dec. 31, n. 1, Venecia, 1757, vol. 2, p. 97.

pues no elimina la posibilidad de una absolución indebida, sino que solamente la aminora. En efecto, puede darse la hipótesis en que, a pesar de que el penitente lo necesite, el confesor no pueda. ¿Es válida la absolución sacramental sin previa absolución de censura? Los autores dudan que sea válida»¹⁸. Es decir, se inclinan por la validez, pero no llegaban a afirmarlo con rotundidad¹⁹.

Esa duda de derecho, positiva y probable, es suficiente para fundamentar una suplencia de jurisdicción —denominada ahora con mayor propiedad en el nuevo Código facultad de ejercer la potestad de orden respecto a los fieles a los que se imparte la absolución—, por lo que, aunque no se lleve a cabo la previa absolución hipotética de censuras, la absolución sacramental es igualmente válida. Por ese motivo puede tal absolución de censuras previa a hipotética considerarse innecesaria para conferir validez a la absolución sacramental subsiguiente²⁰. En cualquier caso, poco tiempo después, se eliminó de la administración del sacramento de la penitencia la exigencia de pronunciar la absolución hipotética de posibles censuras previas. Y esa es la disciplina actual.

Proponía también en mi monografía que la excomunión no se opusiese a la recepción del sacramento de la penitencia. En esta línea, el proyecto de revisión del Derecho penal eclesiástico publicado en 1973 establecía en el c. 16 § 1 que el excomulgado puede recibir el sacramento de la penitencia y el de la Unción de Enfermos. «Excommunicatio —decía el proyecto de canon— vetat sacramenta, exceptis paenitentia et infirmorum unctione, recipere, et sacramenta vel sacramentalia conficere vel administrare».

Como era de esperar, Klaus Mörsdorf se opuso a semejante criterio y alegó que contradecía la enseñanza del segundo Concilio Vaticano y los principios que se habían aprobado para la reforma del Código de Derecho canónico²¹. No obstante, *Communicationes*

18. *El sacramento...*, cit. en nota 1, p. 62.

19. Gommarus MICHIELS, *De delictis et poenis*, vol. 3, Roma, 1961, p. 104; Felix CAPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De censuris iuxta Codicem Iuris Canonici*, 4.ª ed. Roma 1950, n. 107; Cristobal BERUTTI, *De delictis et poenis*, Roma 1938, n. 53.

20. En la regulación del nuevo Código ha desaparecido, además, el antiguo c. 2250 § 2 que prohibía la absolución de pecados sin previa absolución de censuras.

21. Zum Problem der Exkommunikation. Bermerkungen zum Schema Documenti quo disciplina sactionum seu poenarum in Ecclesia Latina denuo ordinatur, en «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 143 (1974), pp. 64-68.

de 1977²² daba noticia de que el proyecto había quedado redactado contrariamente a la opinión de Mörsdorf. Quedó redactado así: «Sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta, exceptis paenitentia et infirmorum unctione, recipere», mereciendo el *placet* de todos; pero añadía en nota: «Pro nunc seposita est quaestio, circa quam multae animadversiones ab Organis consultationes factae sunt, utrum scilicet reinenda sit notio excommunicationis in schemate propisita, quatenus excipit paenitentiam et unctionem infirmorum a generali prohibitione, ipsi excommunicationi propria, recipiendi sacramenta. Haec questio enim examini et decisioni altioris instantia submissa est». Finalmente el canon aprobado —c. 1331— acogió el criterio de que la excomunión impide recibir el sacramento de la penitencia. Dice: «excommunicatus vetatur sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere». Lo propio acontece con el entredicho, a tenor del c. 1332.

No obstante, el c. 1352 establece: «Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetium suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur». Viene, pues, así a establecerse que, al menos en peligro de muerte, la excomunión y el entredicho no impiden recibir el sacramento de la penitencia. Por tanto no en todos los casos, pero al menos sí en peligro de muerte, se establece que la excomunión no acarrea la prohibición de recibir el sacramento de la penitencia.

De otro lado, se derogó el antiguo c. 2250 que prohibía al sacerdote absolver de los pecados, sin absolver previamente de las censuras, si las había. De la incompatibilidad entre excomunión y recepción del sacramento de la penitencia sólo se conservó el antiguo c. 2260 § 1, con la excepción ya señalada del peligro de muerte, en virtud del actual c. 1331.

Según Klaus Mörsdorf, «la proposición de que la excomunión no impide la recepción del sacramento de la penitencia es una contradicción en sí misma, porque excomunión y reconciliación con la Iglesia no pueden coexistir; de otro modo esa una *realitas complexa* de la Iglesia se quebraría en una sociedad jurídica y una comunidad espiritual»²³. Para Mörsdorf²⁴ ello se debe a una incorrecta compren-

22. Vol. IX, n.º 1, p. 149.

23. *Zum Problem...*, cit. en nota 21, p. 66. El subrayado es del autor.

24. *Der Kirchenbann im Lichte der Unterscheidung zwischen äusseren und innerem Bereich*, en «Liber amicorum Monseigneur Onclin. Thèmes actuels de droit canonique et civil», Gemblaux, 1976.

sión de la excomunión procedente de que se ha oscurecido su fundamentación teológica y su alcance se reduce a una consideración jurídica. Señala como ejemplo de esa indebida visión exclusivamente jurídica de la excomunión el n.º 34 de la const *Vacantis Apostolicae Sedis* de Pío XII, que establece que ningún cardenal queda excluido de la elección activa o pasiva para el oficio de Papa por razón de excomunión u otra censura; cosa que considera absurda. La misma crítica hacían Schmaus a mi monografía, invocando la encíclica *Mystici Corporis* de Pío XII ²⁵.

Tengo para mí que resulta improcedente invocar la autoridad de Pío XII, en cuanto en la encíclica *Mystici Corporis* hace hincapié en que no puede establecerse una separación entre una Iglesia jurídica y otra espiritual, precisamente para criticar un precepto relativo a la excomunión establecido por el propio Pío XII. De esa invocación a la enseñanza de Pío XII lo que cabe deducir es más bien que ese modo de entender la excomunión es conciliable con su propia enseñanza, y que no se sigue de ella separación entre una Iglesia jurídica y otra espiritual.

Como Mörsdorf puntualiza muy correctamente «en el fuero interno entra en acción la *auctoritas spiritualis* de la Iglesia, con la única diferencia frente a su uso en el fuero externo de que actúa con cuidado maternal *exquisitiore modo*. Con ello se reconoce que en ambos fueros entra en acción la misma *auctoritas spiritualis* de la Iglesia y sólo se diferencian en el modo y manera de proceder. Con esta caracterización de la acción de la Iglesia en el fuero interno queda claro que la diferenciación entre ambos fueros no consiste en equiparar fuero interno y fuero de la conciencia contraponiendo ámbito jurídico y ámbito de la conciencia. En el fuero de la conciencia el hombre se encuentra de un modo inmediato con Dios y aquí debe responder sólo ante Dios. Un juicio de la Iglesia impartido en el fuero interno no puede eliminar la responsabilidad del hombre ante Dios. Y de otro lado hay que afirmar que un juicio de la Iglesia, ya en el fuero externo ya en el interno, en la medida en que es ajustado a la verdad y correcto, vincula en conciencia. El sentido y finalidad de la diferenciación entre ambos fueros no puede ser el de que el

25. O. c. en nota 3, p. 316. En el mismo sentido vid. Francesco COCCOPALMERIO, *Momentum ecclesiale in sacramento reconciliationis*, en «Monitor Ecclesiasticus» 101 (1976), pp. 41-48.

fuero interno haya de ser entendido como un fuero moral (*forum morale*) al margen del fuero jurídico»²⁶.

Esto es sin duda así; pero ello no quita que incurrir en pecado sea cosa distinta que incurrir en delito, aunque una misma acción pueda dar lugar a incurrir en ambos. También es cosa distinta ser absuelto de un pecado y ser absuelto de una excomunión. De ahí que quepa sostener —y el nuevo Código así lo establece en peligro de muerte— que alguien puede ser absuelto de sus pecados, sin ser absuelto de la excomunión a la que alguno de esos pecados, por ser además constitutivo de delito, haya dado lugar.

Como señala el c. 959, siguiendo al Concilio Vaticano II, en el sacramento de la penitencia el penitente obtiene de Dios el perdón de los pecados y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia. Ahora bien, la separación de la Iglesia por el pecado grave y la reconciliación con la Iglesia que la absolución sacramental otorga son distintas de la separación de la Iglesia que se opera por la excomunión y la reconciliación con la Iglesia que se obtiene mediante la absolución de esa excomunión.

Ambas clases de separación y reconciliación pueden darse tanto en el fuero externo como en el interno. Se separa de la Iglesia por el pecado en el fuero interno quien comete un pecado grave pero oculto; y se reconcilia con la Iglesia en el fuero interno quien recibe la absolución sacramental de ese pecado. Se separa por el pecado de la Iglesia en el fuero externo el pecador público, por ejemplo viviendo en concubinato adulterino e incestuoso público y notorio, y se reconcilia con la Iglesia en el fuero externo quien públicamente depone su actitud pecaminosa. Los comentadores del antiguo c. 855 —que se corresponde con el actual c. 915— señalaban que se da esa penitencia pública, cuando el pecador público se acerca al confesionario delante de algunas personas y da señales exteriores de deposición de su conducta pecaminosa²⁷. Pero el pecador público no es un excomulgado, ni necesita ser absuelto de excomunión alguna para reconciliarse públicamente con la Iglesia.

Concepto distinto del de público pecador, que supone una situación en el fuero externo, es el de excomulgado, ya sea esa exco-

26. *Zum Problem...*, cit. en nota 21, p. 67.

27. Vid. Agustín LEHMKE, *Theologia Moralis*, 4.^a ed., Friburgo 1898, p. 31; Frank J. RODIMER, *The canonical Effects of Infamy of fact*, Washington, 1954, p. 49; Hieronymus NOLDIN, *Summa Theologiae Moralis*, vol. III, *De sacramentis*, 26.^a ed., Leipzig 1941, p. 254.

muni6n *latae* o *ferendae sententiae*, ya sea notoria con notoriedad de hecho o de Derecho, ya sea oculta la incidencia en excomuni6n. El excomulgado se aparta de la Iglesia al incurrir en excomuni6n y se reconcilia con la Iglesia cuando se le absuelve de esa excomuni6n. Y esas situaciones de excomuni6n y absoluci6n de la excomuni6n pueden producirse en el fuero externo o en el interno.

Si un excomulgado es absuelto de su censura, pero no de sus pecados, no por ello se reconcilia con la Iglesia en el sentido del c. 957; cosa que puede suceder si depone su contumacia respecto al delito, pero no respecto a otro pecado grave no constitutivo de delito, o bien porque simplemente se le imparte la absoluci6n de la censura, pero no la absoluci6n sacramental.

Tema completamente distinto de 6ste es el de una posible contradicci6n entre fuero jur6dico y fuero moral. Quien ha obtenido una sentencia de nulidad matrimonial alegando pruebas falsas, no puede en conciencia volver a casarse, aunque jur6dicamente pueda hacerlo. Si se casa de nuevo, tal uni6n merecer6 en conciencia el nombre de concubinato, pero no merece tal calificativo en el fuero externo. De ah6 que M6rsdorf puntualice, como vimos, que el juicio de la Iglesia en el 6mbito jur6dico vincula en conciencia « en la medida en que es ajustado a la verdad y correcto ». Pues bien, tambi6n caben sentencias de excomuni6n basadas en pruebas falsas que respondan a un delito no cometido.

Sabido es que en determinadas 6pocas hist6ricas, y como fruto de disputas entre autoridades eclesi6sticas, algunos anatematizaron indebidamente a otros, excomulg6ndose entre s6. El sentido del n.º 34 de la const. *Vacantis Apostolis Sedis* pretende prevenir que un indebido uso de la excomuni6n pueda originar inseguridades —y lo que es peor una divisi6n— a la hora de fijar el cuerpo electoral encargado de la elecci6n de Papa. En cambio, la proposici6n de que la excomuni6n no impida recibir el sacramento de la penitencia obedece a un criterio distinto del de prevenir una posible ligereza en la irrogaci6n de excomuniones. Se basa en distinguir el fuero del delito del fuero del pecado.

Como puse de relieve en mi citada monograf6a sobre el sacramento de la penitencia, hasta el siglo XII s6lo se excomulgaba a quien se negaba a hacer penitencia. Esa estructura se percibe muy bien en los Decretos de Bucardo de Worms²⁸ y de Ivo de Chartres²⁹. Se proce-

28. *Decretorum Libri XX*, 1-8; PL 140, 855-861.

29. *Decretum*, 14, 76-79; PL 161, 845-848.

día a la ceremonia de excomunión después de la lectura del evangelio, a continuación de la cual se daba lectura un texto dependiente en gran parte de la Didascalia³⁰, en que se glosaba Matth. XVIII, 16-17, conforme al cual los que después de tres admoniciones no quisieran enmendarse deberían ser arrojados del Cuerpo de Cristo. Por tres veces, pues, se recordaba al interesado que si se negaba a acudir al tribunal de la penitencia se le arrojaría de la Iglesia. Concluida sin éxito la tercera amonestación, se maldecía al reo, y los sacerdotes arrojaban al suelo las velas encendidas que al efecto llevaban, deseándole que de igual modo la luz eterna no brille para él. La reconciliación del así excomulgado tenía lugar cuando se avenía a hacer penitencia. Antes de absolverlo de la excomunión, el obispo le preguntaba si estaba dispuesto a hacer penitencia conforme a los sagrados cánones. Si el excomulgado, postrado en tierra, confesaba su culpa, pedía perdón, prometía enmienda y pedía penitencia, continuaba la ceremonia. El obispo lo introducía entonces, llevándolo de la mano, en el interior de la Iglesia, lo declaraba miembro de la sociedad de los cristianos que por el anatema había perdido, y finalmente le imponía la penitencia.

La negativa a hacer penitencia era explicable, si se tiene en cuenta que las penitencias conforme a los sagrados cánones eran durísimas. De ahí que la excomunión fuese calificada como pena medicinal, pues tenía por finalidad que aquel a quien se irrogaba hiciese penitencia. Pero al generalizarse la práctica de la indulgencia y resultar fácil y poco costoso el cumplimiento de la penitencia, la excomunión perdió su genuino carácter medicinal —impulsar a confesarse y hacer penitencia a quien se resistía a ello—, lo cual no era ya necesario, dada la facilidad con que esas penitencias podía cumplirse. Y así comenzó, en una praxis posterior —el cambio se produce en el siglo XII— al establecerse un criterio completamente distinto en la relación entre penitencia sacramental y excomunión, que es la que todavía hoy perdura. Esa nueva relación se basa en las reservas de pecado *ratione censurae*, que con anterioridad no existían.

La reserva *ratione censurae* tiene como efecto que el penitente no pueda ser absuelto de sus pecados, merced a la prohibición dirigida al sacerdocio de administrarle el sacramento de la penitencia. Y, así, quien incurre en excomunión en vez de ser impulsado a recibir el sacramento de la penitencia y cumplir la penitencia que le fuera impuesta es apartado de ella. —

30. Cfr. II, 41, 3-9.

Ese nuevo criterio obedece a una concreta finalidad. Como decía, al resultar fácil lucrar indulgencias, nadie se resistía a hacer penitencia, aunque se le impusiesen años de penitencia, cuyo cumplimiento, merced a las indulgencias, resultaba poco costoso. El modo de evitar que, en la práctica, se pudiera eludir el cumplimiento de las duras penitencias tradicionales se logró merced a las reservas *ratione censurae*. Se introduce entonces la praxis de que, al ser alguien absuelto de una excomunión u otra censura, se le impone una penitencia; pero esa penitencia no tiene lugar en el fuero sacramental, sino en el fuero extrasacramental. No constituye una satisfacción por el pecado, sino una satisfacción por el delito. La satisfacción por el pecado, como parte integrante del sacramento de la confesión, se impone posteriormente, cuando —tras haber sido el reo absuelto de la excomunión y habersele impuesto una penitencia extrasacramental— se procede a la confesión sacramental y, previamente a la absolución de los pecados, se le impone una penitencia sacramental. De esta manera, al imponerse las antiguas penitencias en el fuero extrasacramental, ya no pueden eludirse, aunque se lucren muchos años de indulgencia o incluso una indulgencia plenaria.

Tal es la estructura que se conserva actualmente en las relaciones entre sacramento de la penitencia y excomunión en la actualidad. El c. 1358 establece que quien remite una censura puede imponer una penitencia; y el c. 1357 § 2 ordena imponer una congrua penitencia. Tales penitencias son extrasacramentales.

Como consecuencia de que la antigua penitencia canónica, impuesta como satisfacción de la confesión sacramental, pasase a constituir una satisfacción extrasacramental impuesta a continuación de la absolución de censuras; y como consecuencia de que como satisfacción penitencial sacramental dejó de imponerse penitencias especificadas por años, meses y días de penitencia; la disciplina sobre indulgencias —que continuaba utilizando como esquema de referencia para la concesión de indulgencias el señalamiento de años, meses y días de indulgencia— resultaba cada día de más difícil comprensión para los fieles, cuya ignorancia acerca de su razón de ser histórica les llevaba a entender en algunos casos que ese cómputo de años, meses y días hacía referencia al Purgatorio. La const. *Indulgentiarum doctrina* de 1-III-1967³¹, completado por un decreto de la S. Penitenciaría de 29-VI-1968, reestructuró la disciplina sobre la concesión

31. AAS 59 (1967), pp. 5-24.

de indulgencias, suprimiendo cualquier referencia a días, meses o años de indulgencia.

Cabe señalar igualmente que la antigua penitencia canónica, computada por años, meses y días, que pasó a tener un alcance extra-sacramental, cayó también en desuso³², y el actual c. 1340 la reduce a llevar a cabo alguna obra religiosa, piadosa o de caridad.

No obstante, la estructura de la excomunión en relación con el sacramento de la penitencia continúa siendo la misma que cuando, tras la absolución de la excomunión, se imponía en el fuero extra-sacramental una dura penitencia canónica. Como consecuencia de esta evolución que acabo de describir, la excomunión ha pasado de consistir en una pena medicinal tendente a que el pecador se confiese, en una pena vindicativa, por la que se impide al pecador confesarse, pese a estar rectamente dispuesto a hacerlo. Hoy día las reservas *ratione censurae* no constituyen un medio apto ni proporcionado para que un censurado cumpla la penitencia de que habla el c. 1340.

Como difícilmente puede considerarse medicinal obstaculizar, mediante las reservas *ratione censurae*, que alguien pueda recuperar el estado de gracia, surgió la necesidad de una mitigación de tal disciplina. De ahí que se estableciese la posibilidad de absolver en el fuero interno al penitente de las excomuniones *latae sententiae*, si le era duro al penitente permanecer en pecado mortal; principio que hoy recoge el c. 1357 § 1. Y bien, cabe preguntar, ¿cuándo no es duro para alguien con fe permanecer en pecado mortal, si está arrepentido y dispuesto a la enmienda? Y, si no lo está, ¿por qué prohibir al sacerdote que lo absuelva sacramentalmente, si ya por razón de sus disposiciones no puede ser absuelto? Así, pues, la única eficacia que parecen tener las reservas *ratione censurae* es la de impedir que el arrepentido se reconcilie con la Iglesia por el sacramento de la penitencia, porque para el no arrepentido la reserva se torna innecesaria, ya que su disposición de falta de arrepentimiento impide por sí misma que pueda ser absuelto.

La facilidad tanto para incurrir como para ser absuelto de la excomunión, en el caso de las *latae sententiae*, ha contribuido a mi entender, en algunos casos, a su menosprecio y en otros a fomentar escrúpulos en el confesor y en el penitente, que por lo general no alcanzan a comprender cómo, si la pena acarrea el no poder recuperar

32. Germanus-Joseph PELLEGRINI, *Jus Ecclesiae Poenale*, vol. III, *De poenis in specie*, Nápoles 1967, n. 287, p. 291, nota 36.

la gracia, la pena cesa cuando a alguien le es duro no poder recuperar la gracia. Y, por el contrario, cuando no le es duro, la pena permanece, con lo que se produce la paradoja de que la excomunión en el fuero interno sólo se conserva como pena, cuando no resulta penosa; es decir, sólo es pena, cuando no es pena.

Pues bien, mientras para Mörsdorf, como vimos, «la proposición de que la excomunión no impide la recepción del sacramento de la penitencia es *una contradicción en sí misma*, porque excomunión y reconciliación con la Iglesia no pueden coexistir, pues de otro modo esa *una realitas complexa* de la Iglesia *se quebraría* en una sociedad jurídica y una comunidad espiritual»³³, para nosotros sucede exactamente lo contrario: la contradicción consiste en admitir que haya penas que no son penas. Esa *una realitas complexa* de la Iglesia se quiebra, más bien, cuando se prohíbe al confesor absolver sacramentalmente a quien está arrepentido y dispuesto a la enmienda. Es más bien ahí donde cabría contraponer una Iglesia espiritual, preocupada porque quien está arrepentido recupere la gracia, y una Iglesia jurídica que se lo prohíbe al confesor. Como decía, la razón histórica de ser de las reservas *ratione censurae* ha desaparecido como consecuencia de la mitigación de la penitencia canónica extrasacramental.

33. Cfr. *supra* nota 23.

